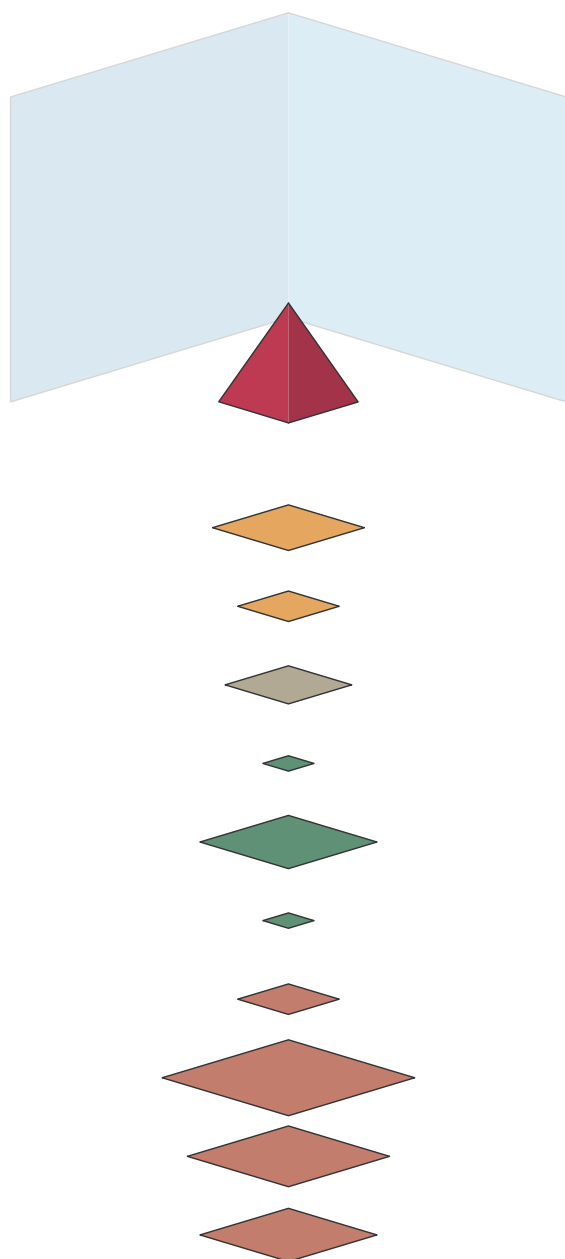


URUGUAY



2,69

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

182.º de 193 países

34.º de 35 países americanos

12.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES

2,75

TRATA DE PERSONAS

3,00

TRÁFICO DE PERSONAS

2,00

TRÁFICO DE ARMAS

2,50

DELITOS CONTRA LA FLORA

1,00

DELITOS CONTRA LA FAUNA

3,50

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES

1,00

COMERCIO DE HEROÍNA

2,00

COMERCIO DE COCAÍNA

5,00

COMERCIO DE CANNABIS

4,00

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS

3,50



ACTORES CRIMINALES

2,63

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO

1,50

REDES CRIMINALES

4,50

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO

2,00

ACTORES EXTRANJEROS

2,50



7,75

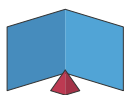
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

10.º de 193 países

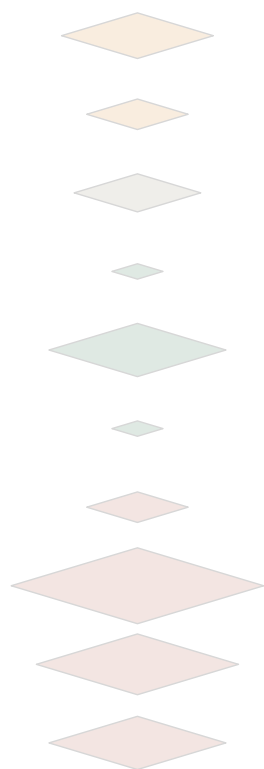
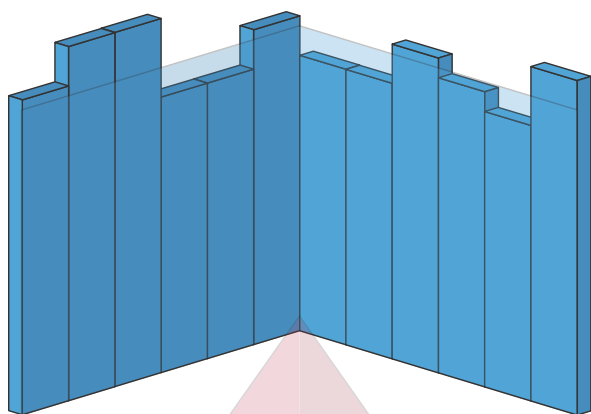
1.º de 35 países americanos

1.º de 12 países de América del Sur





URUGUAY



7,75

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

10.º de 193 países
1.º de 35 países americanos
1.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	8,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	9,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	9,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	7,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	7,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	8,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	7,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	7,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	8,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	7,50
PREVENCIÓN	7,00
ACTORES NO ESTATALES	8,50



2,69

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

182.º de 193 países
34.º de 35 países americanos
12.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES 2,75



ACTORES CRIMINALES 2,63



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Uruguay es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, principalmente bajo la forma de explotación sexual. Muchas de las personas que trabajan en lugares de prostitución legal son víctimas de la trata. Las fronteras permeables con Argentina y Brasil facilitan la trata, y trabajadores son sometidos a trabajos forzados en la construcción, servicios domésticos y de limpieza, cuidado de ancianos, tiendas mayoristas, industrias textiles y madereras, agricultura y pesca. Las víctimas provienen principalmente de Bolivia, Paraguay, Brasil, República Dominicana, Argentina y otros países de América del Sur. Las familias uruguayas empobrecidas también son cómplices de la explotación de niños en la prostitución, así como de la esclavitud doméstica y agrícola en zonas rurales. La mayoría de los perpetradores condenados son ciudadanos uruguayos. Las mujeres, niñas y personas uruguayas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y *queer* (LGTBIQ+) también son obligadas a prostituirse en el extranjero, en España, Italia, Estados Unidos, Argentina y Brasil, entre otros países.

El tráfico de personas parece insignificante, ya que Uruguay comparte fronteras permeables con Argentina y Brasil, y el cruce sin documentación es común. No obstante, las crisis económicas en Cuba y Venezuela han provocado la proliferación de redes de tráfico que brindan alojamiento, traslados y documentación en la región. Las personas traficadas desde Cuba suelen llegar a Uruguay a través de Guyana y Brasil. También se ha informado del tráfico de ciudadanos chinos a Argentina a través de Uruguay.

TRÁFICO

Uruguay es un país de destino de armas ilegales, principalmente provenientes de Brasil. El tráfico de armas ha aumentado en las últimas décadas debido a la alta demanda local, pero son pocos los casos de corrupción denunciados y suelen involucrar a la Policía o al Ejército. La falta de una normativa armonizada en materia de armas entre los distintos países de la región ha generado una mayor demanda de armas traficadas en el país, especialmente desde Brasil. El tráfico ilícito de armas se ha traducido en un aumento del homicidio de policías uruguayos, que son víctimas de robos o asesinatos a manos de criminales que intentan obtener sus armas de fuego.

MEDIOAMBIENTE

Uruguay cuenta con un control estatal eficaz de los crímenes que involucran recursos no renovables y, como importante exportador de productos agrícolas, tiene controles comparativamente estrictos sobre la importación y la exportación de flora y fauna.

El comercio ilegal de flora es insignificante debido a la falta de biodiversidad, y el mercado de fauna ilegal también parece reducido. No obstante, decenas de especies de reptiles, arácnidos, insectos, mamíferos y aves son incautadas cada mes, entre ellos el cardenal amarillo en peligro de extinción. La mayoría de los animales exóticos ingresan a Uruguay desde Brasil y Paraguay, se ha reportado la compra de jaguares fugados en el mercado negro. El robo de ganado, caballos y ovejas por parte de pequeños grupos criminales locales ha aumentado. Este es un tema crítico para una economía que depende de las exportaciones agrícolas, ya que los robos desincentivan el negocio, en particular para quienes trabajan con ovejas. Además, la pesca ilegal generalizada en aguas uruguayas se ve facilitada por la falta de buques patrulleros de la Armada.

DROGAS

Si bien existe un mercado legal, Uruguay es un país de origen, tránsito y destino de cannabis ilegal. El consumo es alto en comparación con otros países de la región y va en aumento. El cannabis consumido a nivel local es suministrado en gran parte por organizaciones criminales a través del mercado negro y se relaciona con un aumento de los homicidios y la violencia. Antes de la legalización, el mercado estaba dominado por redes paraguayas. Aunque algunos todavía compran cannabis ilegalmente, los precios se han adaptado al nuevo mercado legal y la mayoría de los consumidores que compran cannabis ilegalmente lo hacen a través de las redes sociales inmediatas de cultivadores caseros. Existen algunas redes a pequeña escala de productores no registrados, pero la Policía Nacional las conoce y desarticula cualquier intento de exportar cannabis desde Uruguay. Aun así, debido a su alta calidad, el cannabis producido legalmente se trafica de todas formas a países vecinos. Sin embargo, como el mercado uruguayo es pequeño, es poco probable que llegue a convertirse en un problema importante.

Si bien el consumo de cannabis es lo más frecuente en Uruguay, la cocaína y la pasta de coca constituyen el mayor mercado de drogas en términos de incautaciones. No obstante, el mercado interno de cocaína es bastante pequeño y los traficantes extranjeros aprovechan las fronteras permeables de Uruguay con Argentina y Brasil y a menudo utilizan Montevideo como centro logístico para las actividades de tránsito de drogas hacia Europa. Además, en Uruguay también operan actualmente organizaciones criminales de Colombia, México, Brasil y Rusia. El reciente aumento de los homicidios está relacionado con los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes que pretenden controlar barrios, territorios y rutas de tráfico.

Por otra parte, el comercio de heroína en Uruguay no es sustancial en comparación con el mercado interno de cannabis y cocaína. Sin embargo, Uruguay es un país de destino de drogas sintéticas y, aunque el consumo general es bajo, su

uso va en aumento. El éxtasis, producido principalmente en Brasil, se considera caro y lo consumen principalmente personas de ingresos medios a altos.

ACTORES CRIMINALES

Los indicios de grupos de tipo mafioso que operan en Uruguay son mínimos. El crimen organizado se caracteriza predominantemente por pequeños clanes familiares que operan como redes criminales informales en la periferia de las principales ciudades, siendo los más conocidos Los Chingas y Los Kamalas. El primero está involucrado en el tráfico de drogas, robos y robo de ganado. Aunque son relativamente poco frecuentes, las extorsiones, los secuestros y los ataques planificados contra funcionarios y propiedades gubernamentales, así como los enfrentamientos entre delincuentes por el control territorial van en aumento. Si bien en Uruguay operan organizaciones de crimen organizado de

varios países de América Latina, el país no es un centro para sus operaciones. El principal actor extranjero es Primeiro Comando da Capital, que ha estado traficando cada vez más cocaína y cannabis. Los actores criminales brasileños son prominentes en los pueblos fronterizos, donde colaboran con miembros uruguayos para realizar operaciones de tráfico, tráfico de drogas y robo de ganado. La organización criminal mexicana Los Cuinis también tiene una presencia activa en Uruguay, concentrada principalmente en Montevideo y Canelones.

Aunque existe corrupción policial y aduanera, los incidentes de corrupción de bajo nivel parecen ser mínimos y la Policía se encuentra entre las instituciones más confiables del país. Uruguay tiene uno de los sistemas judiciales más sólidos del hemisferio y los infractores generalmente son castigados. No existe evidencia de que los actores estatales faciliten o participen sistemáticamente en actividades criminales.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Uruguay es una república constitucional democrática con un Estado relativamente robusto, partidos políticos fuertes, una ciudadanía participativa y altos niveles de institucionalización. El proceso democrático y los servicios estatales están en gran parte libres de influencias criminales; el Gobierno ha declarado una postura firme contra el crimen organizado y su retórica se ha traducido en políticas concretas. El presupuesto del Ministerio del Interior y la cantidad de personal también han aumentado sustancialmente. Aunque la corrupción es baja, el financiamiento de los partidos no está suficientemente reglamentado. Sin embargo, la ley promueve la transparencia de los organismos públicos y se garantiza el derecho fundamental de acceso a la información gubernamental. La Junta de Transparencia y Ética Pública promueve políticas públicas, normativas y acciones que fortalecen la transparencia estatal, asesora al Poder Judicial y a la administración pública en materia de corrupción, y recibe y resguarda las declaraciones legales de los funcionarios públicos.

Uruguay ha ratificado acuerdos internacionales relacionados con el crimen organizado, la corrupción, las drogas, las armas y la protección de la flora y la fauna. Sin embargo, la legalización del cannabis en el país contraviene una de estas convenciones. Uruguay también cuenta con leyes internas relacionadas con el lavado de dinero, el tráfico y la producción de drogas, las armas, la trata de personas, la protección de víctimas y el crimen organizado transfronterizo. La oficina del fiscal general investiga y procesa crímenes relacionados con la trata y la explotación infantil. En la lucha contra el crimen organizado participan organismos estatales encargados de los temas

relacionados con la migración y la inteligencia, INTERPOL, la Brigada Nacional Antidrogas y la Policía Nacional, así como el Ministerio del Interior en colaboración con la Guardia Republicana, una fuerza policial que se denomina militarizada. La cooperación con INTERPOL y otros cuerpos de seguridad es sólida, y la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Montevideo desempeña un papel importante en la lucha contra la trata y en la preservación de la seguridad nacional y regional. Uruguay posee acuerdos de extradición con Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay y Venezuela, y ha tomado medidas para cambiar su reputación como paraíso fiscal. Sin embargo, carece de legislación sobre el tráfico de automóviles, un problema importante en el país.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema penitenciario uruguayo sufre de hacinamiento, malas condiciones de vida, alta reincidencia, violencia, tortura e impunidad. Si bien los grupos criminales no ejercen un control significativo sobre las cárceles, ocurren operaciones criminales, como el tráfico de drogas. No obstante, varias fiscalías se especializan en crimen organizado y parecen ser eficaces, aunque carecen de recursos. Uruguay también cuenta con estrictas leyes y regulaciones internas que rigen las interacciones policiales. Sin embargo, la Policía Nacional enfrenta dificultades para brindar seguridad básica, en parte debido a la falta de capacitación suficiente. El Ministerio del Interior supervisa la seguridad pública junto con la Guardia Republicana, un cuerpo policial de élite considerado bien equipado y entrenado.

Aunque Uruguay no es un país productor de drogas, los traficantes extranjeros explotan sus fronteras permeables con Argentina y Brasil. El tráfico de drogas ha aumentado, quizás debido a la militarización y el enfoque de tolerancia cero de Brasil. No obstante, existe poca evidencia que sugiera que organizaciones criminales controlan partes de la frontera. Para apoyar a la Policía, el Gobierno ha autorizado la vigilancia militar, el patrullaje, la identificación de personas, el control de vehículos y la detención criminal en áreas fronterizas, pero algunos desafíos estructurales dentro de la Fuerza Aérea y la Armada, como aviones inoperables y la falta de radares y embarcaciones, ponen en riesgo la integridad territorial.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Aunque tradicionalmente se considera un paraíso fiscal, Uruguay ha realizado varios avances normativos y ha implementado leyes que abordan el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la transparencia fiscal y la inclusión financiera. Estas medidas obligan a los bancos a identificar a los beneficiarios finales de los fondos, crea trazabilidad para las operaciones financieras e incorpora la evasión fiscal como antecedente del lavado de dinero. Además, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos es responsable de implementar las políticas sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo. A pesar de los altos impuestos, la economía está bien regulada y el Estado está bien equipado para garantizar que las empresas legítimas operen libremente, al tiempo que defiende los derechos sobre la tierra y la propiedad.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

La fiscalía supervisa la protección de víctimas y testigos, pero aunque se han implementado medidas de apoyo a las víctimas del crimen organizado, resulta difícil evaluar su eficacia. Es posible que muchas víctimas y testigos del crimen organizado no acudan a la Policía por miedo a represalias, y alrededor de la mitad de los homicidios nunca se resuelven. También se podría hacer más para identificar y apoyar a las víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud.

El Gobierno financia varios centros de tratamiento de la drogodependencia y la Junta Nacional de Drogas cuenta con un programa llamado El Portal Amarillo, que lleva un registro de quienes reciben tratamiento y proporciona atención a sus familias. Además, las campañas de reducción de daños han afectado la influencia del mercado de las drogas sintéticas al alentar a los usuarios a solicitar que los productos sean sometidos a pruebas de pureza. No obstante, el tratamiento es escaso y generalmente está dirigido por ONG como Remar y Beraca. Otras ONG conocidas incluyen la red de organizaciones de defensa de los jóvenes Nada Crece a la Sombra. Además, la sociedad civil participa en el debate sobre la aplicación de la ley y la edad de responsabilidad penal. Con excepción de las medidas relacionadas con el cannabis, las políticas e iniciativas de prevención en Uruguay son escasas. Si bien no existe una estrategia de prevención del crimen organizado y las comunidades locales están más

preocupadas por la delincuencia callejera común, Uruguay participa en actividades multilaterales contra el crimen transnacional. A pesar de que la Policía Nacional ha realizado esfuerzos para reconceptualizar su relación con la comunidad, han sido esporádicos y no han tenido resultados significativos.

En general, el entorno mediático en Uruguay es favorable, aunque se han registrado amenazas, intimidación, presión política, hostigamiento judicial y al menos un intento de asesinato.

Este resumen fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.